

RESOLUCIÓN No. 00021

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE SDA-08-2010-427, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las funciones delegadas mediante la Resolución 1037 de 2016, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, en cumplimiento con lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, el Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 y;

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que el día 20 de febrero de 2007 la Dirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, realizo visita de Evaluación, Control y seguimiento, en la Avenida Jiménez No. 06-77/93 de la localidad de la Candelaria de Bogotá D.C., consignando los resultados en el Concepto Técnico 1544 de 2007, en el que se estableció que la sociedad **CEETTV S A, “CASA EDITORIAL EL TIEMPO Y CITY TV”**, identificada con Nit. No. 900.163.045 - 5, incumplía presuntamente con las normas ambientales vigentes.

Que la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, realizó visita de seguimiento y control el 23 de agosto de 2007, en la Avenida Jiménez No. 06-77/93 de la localidad de la Candelaria de Bogotá D.C., en consecuencia, se expidió el Concepto Técnico 7887 del 23 de agosto de 2007, en el cual se sugirió iniciar las actuaciones administrativas pertinentes.

Que la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría encontró merito suficiente para dar inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto 3621 de 26 de noviembre de 2007, en contra del presunto infractor, a la sociedad **CEETTV S A “CASA EDITORIAL EL TIEMPO Y CITY TV”**, identificada con Nit. No. 900.163.045 - 5, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que, a través del **Auto del 3621 de noviembre de 2007**, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se dispuso:

“ARTICULO PRIMERO. *Abrir investigación Administrativa sancionatoria de carácter ambiental a la CASA EDITORIAL “EL TIEMPO” Y CITY TV, en cabeza de su representante legal, por la presunta violación a la normatividad ambiental vigente, concretamente a lo establecido en el artículo 30 del decreto 959 de 2000 y el artículo 5° de la resolución 1944 de 2003, con la instalación de la valla convencional y del aviso adosado a fachada ubicados en la Avenida Jiménez No. 6 – 77/93 de esta ciudad.*

RESOLUCIÓN No. 00021

“ARTÍCULO SEGUNDO: Formular siguientes cargos a la CASA EDITORIAL “EL TIEMPO” Y CITY TV, en cabeza de su representante legal:

CARGO PRIMERO: Presuntamente haber instalado los elementos de Publicidad Exterior Visual tipo valla convencional y aviso adosado a fachada ubicados en la avenida Jiménez No. 6 – 77/93, sin contar con el registro previo expedido por la entidad competente, violando presuntamente con esta conducta el artículo 30 del decreto 959 de 2000 y el artículo 5° de la resolución 1944 de 2003.

CARGO SEGUNDO: Por haber instalado la valla, aviso, o elemento de publicidad exterior visual sobre la cubierta del edificio, lo cual está prohibido, violando presuntamente con esta conducta el art. 8 literal d, del Decreto 959/2000. Artículo 87 numeral 7) Acuerdo 79/2003 Código de Policía.

CARGO TERCERO: Presuntamente por haber instalado la valla o elemento de publicidad exterior visual en inmueble que se encuentra en dentro del perímetro del centro histórico de la ciudad de Bogotá, el cual es objeto de regulación por el artículo 6 del decreto 506 de 2003, violando presuntamente con esta conducta la mencionada norma.

Que la Sociedad CEETTV S.A. “CASA EDITORIAL EL TIEMPO” identificada con Nit. 900.163.045-5 a través de su apoderado Judicial el Doctor LUIS FERNANDO POSADA SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía 79.154.251, presento descargos contra el Auto 3621 del 26 de noviembre de 2006, solicitando:

“(…)

PRIMERO: Archivar el trámite correspondiente a la investigación sancionatoria iniciada por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente contra la Casa Editorial El Tiempo, mediante la Resolución No. 3621 del 26 de noviembre de 2006, mediante la cual la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Secretaria Distrital de Ambiente.

(…)”

Que mediante el Auto 1167 del 16 de junio de 2008, la Secretaría Distrital de Ambiente decretó la práctica de pruebas, dentro de la investigación ambiental iniciada por esta Entidad, en contra de la sociedad CEETTV S.A. “CASA EDITORIAL EL TIEMPO” identificada con Nit. 900.163.045-5.

Que el Auto de pruebas en mención fue notificado personalmente a la sociedad CEETTV S.A el 26 de noviembre de 2008, a través de su autorizado, el señor Hernán Quiñones Pinzón, identificado con cedula de ciudadanía 80.037.159 de Bogotá D.C.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

RESOLUCIÓN No. 00021

Que teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por esta entidad a través de un operativo de descontaminación del espacio público realizado el día el 20 de febrero de 2007, esto es con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, resulta procedente establecer como primera medida la normativa aplicable al presente caso conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009.

Que, así las cosas, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso, ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

Que del tenor literal del artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, se colige que la transición prevista por el Legislador aplica únicamente para el procedimiento, de suerte que en materia sustancial, de avocar una decisión de fondo sancionatoria, la normativa aplicable al presente caso sería la prevista en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, en armonía con el debido proceso constitucional, acorde con el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (inciso 2º, artículo 29 CP). En otros términos, se reafirma la improcedencia de aplicar al sub examine las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

Que, en efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, *los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr**, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando** se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, **empezaron a correr los términos**, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones". (...)* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Que, así las cosas, se concluye que en el presente caso la Secretaría conoció del hecho irregular el 20 de febrero de 2007, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley

RESOLUCIÓN No. 00021

1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de veinte (20) años. En su lugar, regía el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en tres (3) años.

Que en definitiva, al amparo del DEBIDO PROCESO y del PRINCIPIO DE LEGALIDAD a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Que aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad, en términos generales, un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009, respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo “nadie puede ser juzgado sino (...) *Por juez o tribunal competente*”, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Que, al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Que así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva en el sub examine al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se trata de un asunto que encuentra solución en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo; las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término que había empezado a transcurrir era el de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984.

Que respecto al fenómeno de la caducidad es preciso enunciar la Sentencia T-433 de la Sala Sexta de Revisión, del 24 de junio de 1992, así:

RESOLUCIÓN No. 00021

"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase."

Que, en este orden de ideas, y entendida la caducidad como un término para realizar un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto, se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:

"... Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas"

Que al respecto, el Honorable Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**" (...) Resaltado fuera del texto original*

Que frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*(...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: " (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del*

RESOLUCIÓN No. 00021

término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶... (Subrayado fuera de texto).

Que para el caso que nos ocupa, se deduce que la administración disponía de un término de tres (3) años contados a partir de la fecha de conocimiento de los hechos, esto es, desde el **20 de febrero de 2007** día en que fue realizado el operativo de descontaminación de espacios públicos, y hasta el hasta el **26 de febrero de 2010**, para la expedición del acto administrativo que resolvería de fondo la actuación administrativa, frente al proceso sancionatorio iniciado por la publicidad exterior visual encontrada en la en la Avenida Jiménez No. 06-77/93 de la localidad de la Candelaria de Bogotá D.C., trámite que a la fecha no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, por lo expuesto, esta Resolución procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y, en consecuencia, ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2010-427**.

COMPETENCIA

Que los Artículos 101 y 103 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 8 de febrero de 2009, le asignó a la Secretaría Distrital de Ambiente, entre otras funciones generales, la de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital.

Que mediante el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 1037 de 2016, se delegó en el Director de Control Ambiental de esta Secretaría la función de: “[e]xpedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso iniciado mediante la Resolución 3621 del 26 de noviembre de 2007, en contra la sociedad **CEETV S A, “CASA EDITORIAL EL TIEMPO Y CITY TV”**, identificado con Nit. No. 900163045 - 5 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

RESOLUCIÓN No. 00021

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución la sociedad **CEETV S A**, “**CASA EDITORIAL EL TIEMPO Y CITY TV**”, identificado con Nit. No. 860001022 - 7, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces, en la Avenida Calle 26 N° 68B-70 de Bogotá D.C., o al correo electrónico notificaciones@citytv.com.co de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: ENVIAR la presente Resolución a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de esta Secretaría, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2010-427**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 09 días del mes de enero del 2017



OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Expediente): SDA-08-2010-427

Elaboró:

CAROLINA RIVERA DAZA

C.C: 52482176

T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA
EJECUCION:

21/12/2016

Revisó:

Página 7 de 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 00021

JENNY CAROLINA ACOSTA
RODRIGUEZ

C.C: 52918872

T.P: N/A

CONTRATO
20160599 DE
2016

FECHA
EJECUCION:

23/12/2016

Aprobó:
Firmó:

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA

C.C: 11189486

T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO

FECHA
EJECUCION:

09/01/2017